

Violencias y política: Análisis de los mecanismos en contra de la violencia hacia las mujeres en el contexto del proceso electoral 2020-2021

Violence and politics: Analysis of the mechanisms to ending violence against women in the context of 2020-2021 electoral process

Alma Verónica Méndez Pacheco¹

Introducción

La violencia en contra de las mujeres se refiere a “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (Convención de Belem Do Para, 1994: Artículo 1). Existen distintos tipos de violencia: física, sexual, psicológica, económica o patrimonial, además de que se pueden presentar en diversos ámbitos como el familiar, laboral, comunitario o político.

La violencia en contra de las mujeres no es un fenómeno nuevo en México y aunque desafortunadamente se puede ejemplificar con diversos casos, quizá el más emblemático — por el llamado de atención internacional al Estado mexicano— es el *Caso González y otras vs. México* o “Campo Algodonero”.

Este caso analiza la desaparición y feminicidio en 2001 de Esmeralda, Claudia y Laura en Ciudad Juárez, Chihuahua. En esta resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señala que desde 1993 hubo un aumento en el número de desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas en esta ciudad. Además, da cuenta de la constante violación en el país de los procedimientos judiciales, de las investigaciones y, por tanto, de los derechos de las víctimas y de sus familiares desde 1998 (CoIDH, 2009).

Si bien México ratificó desde la década de los cincuenta distintos instrumentos para el respeto irrestricto de los derechos de las mujeres, resulta importante recuperar en este punto a Mackinnon cuando visibiliza el estándar sobre el cual se ha planteado el principio de

¹ Comunicóloga política por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Contacto: veroumz@gmail.com

igualdad: “valores culturales específicamente blancos y masculinos” (1983: 100-101). Por lo que las mujeres, bajo esta postura androcéntrica, son quienes “tienen que probar que no son tan diferentes de los hombres y que merecen ser tratadas como humanas” (Facio, 2011: 1).

A pesar de la adopción de estos tratados, desde hace tiempo los derechos de las mujeres han sido vulnerados y se han preservado roles y estereotipos de género. La introducción de nuevos protocolos para identificar las desigualdades, las conductas discriminatorias y el impacto diferenciado de la aplicación de la ley ha permitido dimensionar la violencia que viven las mujeres en el país.

Aunado al promedio de 10 asesinatos de mujeres diariamente, en 2020 se denunciaron 611 incidentes de violencia familiar en contra de una mujer, 160 mujeres fueron víctimas de lesiones dolosas y 46 de violación; mientras que en el marco del proceso electoral 2020-2021, 21 candidatas fueron asesinadas (García, 2021; Toche, 2021). Aunque en el caso de los asesinatos aún se encuentra en investigación el móvil y podría tratarse únicamente de violencia política, esta numeralia brinda indicios acerca de la importancia de implementar una estrategia integral para detener la discriminación y erradicar la violencia en contra de las mujeres.

Desde el ámbito político-electoral, en 2016 se publicó el *Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género*, un esfuerzo conjunto de instituciones como el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM). Además de la introducción de medidas afirmativas desde los noventa para que más mujeres ejerzan sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad frente a los hombres y de forma plena.

Así, el presente estudio tiene como propósito analizar dos mecanismos implementados en el marco del proceso electoral 2020-2021: el formato “3 de 3 contra la violencia”, impulsado para asegurar que las personas aspirantes a una candidatura no fueran deudoras alimentarias ni agresoras de género, y el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, resultado de una sentencia del TEPJF.

I. Violencia y mujeres

a) Un código común

Cuando se analiza la violencia de género, la pregunta que se presenta con mayor frecuencia se relaciona con cuáles son las causas. Para responderla hay dos caminos: aquel que identifica las causas inmediatas y directas de esa violencia y el que, reconociendo esos elementos, intenta ir al trasfondo evidenciando las prácticas o mecanismos que la perpetúan para proponer medidas que también las atiendan.

Para ello, es fundamental tener en cuenta que la historia de la humanidad, su configuración y ordenamiento ha sido planteada desde la mitad dominante: los hombres. El llamado “sistema patriarcal”, que supone la subordinación de las mujeres frente a los hombres, data del Neolítico y su paradigma se ha reproducido y sostenido en las creencias, ideologías, en la ciencia, entre otros, por lo menos durante 2,500 años (Lerner, 1985; Friedan, 1963; Beauvoir 1977). Este sistema surge de la diferenciación entre ambos sexos a partir de sus características genéticas, anatómicas y fisiológicas a las que les atribuyó determinaciones socioculturales. De ahí la importancia de distinguir entre el sexo biológico (y sus distintos niveles físicos) y el *género* como construcción sociohistórica: los roles y comportamientos esperados según se nace mujer u hombre; el “ideal” de feminidad o masculinidad en una sociedad determinada (Scott, 2000; Tubert, 2003).

Para comprender mejor la categoría *género* se deben tener en cuenta sus esferas social e histórica, pero también que implica una interdependencia entre mujeres y hombres y que esas relaciones se presentan de forma asimétrica, por tanto, son relaciones de poder cuyo impacto se agrava cuando se suman otras características como la clase social, raza, etnia, edad o la pertenencia a algún grupo minoritario o históricamente discriminado.

La dominación de los hombres y su imposición de representaciones es un juego de suma cero: las mujeres son definidas en función de valores excluyentes que describen a los hombres. Por ejemplo, el sistema sexo-género, formula que a ellos —como seres racionales, fuertes, independientes, competitivos y dominantes— les corresponde el análisis de los asuntos públicos, son el sostén económico de los hogares, responsables de su protección y de la toma de decisiones. En cambio, las mujeres al ser emocionales, sensibles, débiles, sin

aspiraciones personales y dependientes son “ideales” para las labores de cuidado: del hogar, de las infancias, etcétera, y están destinadas al espacio privado.

Las ideas o representaciones de lo que es “ser” mujer u hombre son conocidas como *estereotipos de género*; mientras que las tareas o funciones sociales que tienen son los *roles de género*. Estas expectativas limitan su desarrollo en todos los ámbitos y, partiendo de la desigualdad, provocan discriminación y violencia.

b) Tipos de violencia en contra de las mujeres

En el pensamiento político clásico de Hobbes existen tres causas de disenso entre las personas: la competencia, la desconfianza y la gloria, ya que lo que buscan es el beneficio, la seguridad y la reputación, respectivamente. El Estado se justifica en este entorno, su no existencia implicaría una lucha constante. Por lo que la violencia, entendida como la aplicación de una fuerza física intensa deliberada con el fin de hacer daño, se reduce en una comunidad política cuando se limitan las libertades a través del contrato social (Cuervo, 2016; Hobbes, 1980).

Hacer un cruce entre el planteamiento de Hobbes sobre el deseo humano, específicamente de los hombres como seres dominantes en el ordenamiento político, y la perspectiva feminista de la historia de la humanidad permite apuntar que la violencia en contra de las mujeres parte del deseo de aprovecharse de los recursos en general. Bajo esta perspectiva, las mujeres son vistas como parte de los bienes de los hombres: bienes que pueden disfrutar y desechar.

Además, según Rosa Cobo, como parte de la reacción patriarcal a las resistencias de las mujeres a los mandatos de género y a la reivindicación de nuevas formas de organizar la sociedad, con mayor frecuencia se presentan agresiones despersonalizadas; es decir, en la que el hombre no agrede porque considere que una mujer es de su propiedad, porque quiera que siga siéndolo o que ya no lo sea, sino simplemente porque puede (2011: 19). El cuerpo femenino y feminizado es visto también como territorio; como espacio de conquista (Segato, 2016).

Entonces, la violencia en contra de las mujeres, como ya se ha señalado, se refiere a la omisión u acción que cause algún daño a una mujer por serlo, en el ámbito privado y

público (CEDAW, 1992; Convención de Belem Do Para, 1994; LGAMVLV, 2020). Existen distintos tipos de violencia en contra de las mujeres (LGAMVLV, 2020: artículo 6; LGIPE, 2020: artículo 3):

- **Psicológica.** Se refiere a aquel acto u omisión que vulnere la estabilidad psicológica de la mujer y que pueda llevarla a una depresión, aislamiento, a la devaluación de su autoestima o suicidio. Puede presentarse como abandono, celos, insultos, humillaciones, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, etcétera.
- **Física.** Aquella que inflige daño intencional a través de la fuerza física o con el uso de algún tipo de arma u objeto que pueda provocar, o no, lesiones internas y/o externas.
- **Patrimonial.** Se trata del acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima al vulnerar sus derechos patrimoniales o recursos económicos para sus necesidades, de modo que puede incluir el daño de bienes comunes o propios mediante su transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción.
- **Económica.** Aquella que, pretendiendo afectar la supervivencia económica de la mujer, limita o controla sus ingresos monetarios.
- **Sexual.** Se refiere al acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la mujer y, por tanto, atenta contra su integridad física, libertad y dignidad. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.
- **Política en razón de género.** Es cualquier omisión o acción (incluida la tolerancia), basada en elementos de género: por ser mujer, afectarle desproporcionadamente o de forma diferenciada, en la esfera pública o privada y que pretenda limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres; el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad; el libre desarrollo de la función pública; la toma de decisiones; la libertad de organización, y el acceso y ejercicio a las prerrogativas.

Un tipo de violencia sexual es la violación, que implica no solo el control físico de la mujer, sino uno moral. Para Rita Segato, la violación impulsa una pedagogía de la crueldad a través del castigo ejemplar y de la muestra de poder (2016).

La violencia en contra de las mujeres se presenta en ámbitos y modalidades diversas (LGAMVLV, 2020):

- En el familiar, la persona que agrede tiene una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad y realiza un acto abusivo de poder u omisión intencional para dominar, someter, controlar o agredir de forma física, verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual. La violencia de este tipo no se acota al domicilio familiar, el énfasis se encuentra en la relación que tiene la persona que violenta y la mujer.
- En lo laboral o docente, es perpetrada por quien tiene un vínculo laboral, docente o análogo con la mujer (sin importar la relación jerárquica), lo que impide su desarrollo profesional y atenta contra la igualdad. Se puede materializar también en hostigamiento o acoso sexual.
- En la comunidad, se transgreden los derechos fundamentales de las mujeres, lo que propicia su minusvaloración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.
- En el institucional, las y los servidores públicos son quienes afectan con sus actos u omisiones a la mujer, al retardar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de sus derechos humanos.
- En el político, supone la vulneración u obstáculo para que una mujer ejerza plenamente sus derechos político-electorales al anularlos, limitarlos, menoscabarlos o simplemente impedir su práctica.
- En lo digital o mediático, se refiere a cualquier acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación en contra de una mujer para causar daño psicológico o emocional en cualquier ámbito de su vida. Por ejemplo, mediante la exposición, distribución, difusión, exhibición, transmisión, comercialización o intercambio de materiales audiovisuales con contenido íntimo sexual sin su consentimiento y que, en consecuencia, afecta su imagen, dignidad y vida privada.

La forma extrema de violencia de género en contra de las mujeres es la violencia feminicida, su asesinato. Este tipo de violencia considera el conjunto de actitudes y conductas misóginas que “pueden conllevar impunidad social y del Estado” (LGAMVLV, 2020: artículo 21). De acuerdo con Marcela Lagarde, el *feminicidio* es el “genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres” (2008: 216).

Lagarde también plantea que el feminicidio tiene un terreno fértil cuando hay negligencia, silencio y colusión de las autoridades porque, aunado a la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, impera un estado de indefensión de las mujeres ante la violencia en su contra (2008).

Al examinar no solo las causas del feminicidio, sino también su impacto, Rita Segato anima a analizar los feminicidios como un mensaje de su perpetradores: “La violencia constituida y cristalizada en forma de sistema de comunicación se transforma en un lenguaje estable y pasa a comportarse con el casi-automatismo de cualquier idioma. Preguntarse, en esos casos, por qué se mata en un determinado lugar es semejante a preguntarse por qué se habla una determinada lengua” (2016: 45). En este sentido, también apunta que:

El poder soberano no se afirma si no es capaz de sembrar el terror. Se dirige con esto a los otros hombres de la comarca, a los tutores o responsables de la víctima en su círculo doméstico y a quienes son responsables de su protección como representantes del Estado, le habla a los hombres de las otras fratrías amigas y enemigas para demostrar los recursos de todo tipo con que cuenta y la vitalidad de su red de sustentación, le confirma a sus aliados y socios en los negocios que la comunión y lealtad de grupo continúa incólume. Les dice que su control sobre el territorio es total, que su red de alianzas es cohesiva y confiable, y que sus recursos y contactos son ilimitados (Segato, 2016: 46).

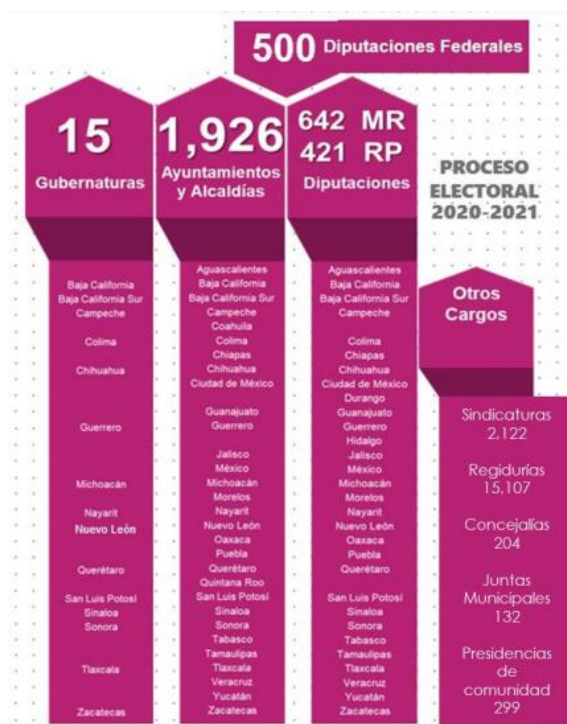
Por ello, la importancia de profundizar en las causas de la violencia en contra de las mujeres e implementar políticas públicas y mecanismos que más que paliativos, atiendan la raíz.

II. Proceso electoral 2020-2021

Todo proceso electoral federal se integra por al menos tres etapas: la preparación de la elección; la jornada electoral, y los resultados y declaraciones de validez de las elecciones de diputaciones. Cuando en el proceso electoral también se renueva el Senado y la Presidencia de la República, la tercera fase es la de resultados y declaraciones de validez de las elecciones de diputaciones y senadurías, mientras que la última corresponde al dictamen y declaraciones de validez de la elección y de la persona titular de la Presidencia de la República (LGIPE, 2020).

a) Numeralia y contexto

La organización del proceso electoral 2020-2021 implicó un esfuerzo encomiable por parte de las autoridades administrativas: se renovaron 21, 368 cargos de elección popular y, a pesar del contexto sanitario, la participación ciudadana alcanzó el 52.66 % de la lista nominal, lo que representa más de 49 millones de personas (INE, 2021a: 113).



Fuente: INE, 2021b

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo la declaración de pandemia, derivada del virus SARS-CoV-2, mejor conocido como Covid-19. Veinte días después, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se determinó la suspensión inmediata de las actividades no esenciales durante un mes con el fin de implementar las medidas necesarias para atender la emergencia sanitaria. En atención a este acuerdo y subsecuentes, la aprobación de la metodología para el desarrollo de las diversas actividades para la organización de las elecciones por parte del INE se retrasó hasta el 24 de junio, fecha en la que también se definió la estrategia para la reactivación paulatina de las actividades presenciales de sus integrantes (INE/JGE69/2020).

Entre los elementos que el INE tomó en consideración se encontraron: la información publicada por la OMS al respecto de las fases de la pandemia; los semáforos; la regionalización establecida por la Secretaría de Salud en el país, y el censo a las y los servidores públicos del Instituto. De esta forma se determinaron tres modalidades de trabajo: la presencial, la semipresencial y a distancia, además de un esquema escalonado para la atención de los protocolos correspondientes. Asimismo, se creó un grupo estratégico de apoyo para garantizar la operatividad del Instituto sin poner en riesgo sanitario a su personal.

El Grupo *INE C19*, como se le denominó, se conformó por las personas titulares de la Secretaría Ejecutiva; de las Direcciones Ejecutivas de Administración, Capacitación Electoral y Educación Cívica; Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, así como de las Unidades Técnicas de Servicios de Informática y de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales; de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, y de la Dirección Jurídica.

Así, algunas de las fechas más importantes para el proceso electoral federal fueron (TEPJF, 2020):

- 28 de octubre: emisión de la Convocatoria para aspirantes a una diputación por la vía independiente.
- Del 30 de octubre al 1 de diciembre el registro de aspirantes independientes a una diputación.
- Del 23 de diciembre al 31 de enero: precampañas electorales.
- Del 22 al 29 de marzo: solicitud de registro de candidaturas independientes y de partido.

- Del 4 de abril al 2 de junio: campañas electorales.
- 6 de junio: jornada electoral.
- 1 de septiembre: instalación de la Cámara de Diputados.

b) Mujeres y derechos político-electorales

Como ya se señaló, históricamente las mujeres han sido asociadas con la esfera privada, por lo que su incorporación a la toma de decisiones públicas comenzó recién en el siglo XIX. En consecuencia, se generaron diversos instrumentos como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer o la Plataforma de Acción de Beijing para incentivar y garantizar su participación en procesos electorales y en el diseño e implementación de políticas públicas en condiciones de igualdad frente a los hombres.

Es importante enfatizar en que la igualdad legal no necesariamente se ha traducido en igualdad sustantiva. Entonces, si bien en la mayoría de los países las mujeres pueden participar en la deliberación de los asuntos públicos y en la toma de decisiones, en la práctica se ven obstaculizadas para hacerlo; ya sea por los roles y estereotipos de género o porque *de facto* se les desincentiva (ONU, 2014).

En México, el derecho a votar de las mujeres fue reconocido en 1953, pero no fue hasta la década de los noventa que se introdujeron las primeras sugerencias para incentivar la participación de las mujeres en el espacio público. Tales recomendaciones fueron reforzadas bajo la figura de cuota de género hasta alcanzarse la paridad de género a nivel constitucional en 2014.

Así, la Constitución federal mexicana actual reconoce como derechos político-electorales el acceso al voto en las elecciones y consultas populares, poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país y participar en los procesos de revocación de mandato (2021: artículo 35).

Entre los cambios que planteó la paridad de género en la organización del sistema político-electoral se encuentran: la obligación de los partidos de garantizar la postulación de 50 % de mujeres y 50 % de hombres a cargos de elección popular, observando no postular a uno de los géneros en distritos que habitualmente pierde; la integración de fórmulas del

mismo género para las diputaciones, senadurías y ayuntamientos —aunque mediante jurisprudencia el TEPJF ha admitido fórmulas encabezadas por hombres con suplentes mujeres para potenciar las posibilidades de representación en caso de que el propietario solicite licencia— y la alternancia en las listas por representación proporcional (CPEUM, 2021: artículo 41; LGIPE, 2020: artículos 14.4 y 234 y LGPP, 2020: artículo 3.5).

Esta acción afirmativa ha significado que, por ejemplo, la LXIV Legislatura esté integrada por 244 diputadas y 256 diputados, así como por 63 senadoras y 65 senadores (Cámara de Diputados, 2020; Senado, 2020).

Asimismo, el 14 de mayo de 2019 se propuso en el Senado la reforma a nueve artículos constitucionales para asegurar la paridad en ayuntamientos, en los gabinetes federal y locales, en los organismos autónomos y en órganos jurisdiccionales. Esta propuesta de reforma fue publicada el 6 de junio del mismo año, con lo que, aunado a paridad en la postulación de candidaturas, se debe garantizar la paridad vertical y horizontal en la integración de ayuntamientos por el sistema de partidos; observar su cumplimiento en municipios con población indígena, y respetar la paridad en los nombramientos de la integración de organismos autónomos, de las secretarías de los poderes Ejecutivos federal y locales y en la integración de órganos jurisdiccionales (DOF, 2019).

c) Violencia de género y derechos políticos

Aunque las causas de la violencia de género son variadas, en el ámbito académico, político y jurisdiccional parece haber un consenso al respecto de que el incremento en la violencia política en contra de las mujeres responde a su mayor participación en los espacios de toma de decisiones y a su búsqueda por incidir en el diseño e implementación de políticas públicas (Gilas y Méndez, 2018).

Para prevenir, atender y sancionar la violencia en contra de las mujeres, se reformaron diversas disposiciones en abril de 2020, entre los elementos a destacarse se ubica que se le atribuye al INE y a los Ople la promoción de la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres; la incorporación de la perspectiva de género en el monitoreo de las precampañas y campañas electorales en radio y televisión, y la facultad de sancionar aquellas conductas que constituyan violencia política

contra las mujeres en razón de género, según la normativa aplicable (LGAMVLV, 2020: artículo 48 Bis). Esta reforma también supuso cambios a la LGIPE como (2020):

- La inclusión del inciso g) al artículo 10 que señala que, para obtener una candidatura a una diputación federal o senaduría, la persona aspirante no debe estar condenada por el delito de violencia política de género contra las mujeres.
- El respeto a la paridad de género en las consejerías electorales.
- La facultad del INE para suspender de forma inmediata la propaganda política o electoral que discrimine o constituya actos de violencia política de género contra las mujeres.

En el marco del proceso electoral 2020-2021, el INE publicó un manual para presentar quejas o denuncias por violencia política en contra de las mujeres por razón de género, en el que se señala que puede presentarlas quien vivió la violencia o terceras personas, siempre que cuenten con su autorización mediante poder notarial, carta poder simple, comparecencia en cualquier órgano del Instituto con fe pública, llamada telefónica o correo electrónico (INE, sf: 5).

Igualmente, el INE publicó el Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género el 31 de agosto de 2020.

d) El Formato 3 de 3

Quizá una de las medidas que más llamó la atención en este proceso electoral, posiblemente por su impulso desde la sociedad civil y de integrantes del Legislativo federal, fue el *Formato 3 de 3 contra la violencia*.

El 19 de octubre de 2020, la Cámara de Diputados y la organización “Las Constituyentes MX” presentaron un escrito a la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE para solicitar que se implementara a las y los aspirantes a una candidatura un formato contra la violencia de género.

El 28 de octubre, el Consejo General aprobó los *Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género*,

en los que adoptó dicho formato por considerarlo acorde con los estándares internacionales sobre la protección de los derechos humanos de las mujeres y la obligación estipulada en la Constitución federal sobre la promoción, respeto, protección y garantía de sus derechos.

Este formato, mejor conocido como el *Formato 3 de 3 contra la violencia* consiste en que cada persona aspirante a una candidatura debe firmar un documento de buena fe y, bajo protesta de decir verdad, manifestar que no ha sido condenada o sancionada mediante resolución firme por (INE/CG517/2020):

- 1) Violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
- 2) Delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
- 3) Ser deudora alimentaria o morosa que atente contra las obligaciones alimentarias, excepto si se acredita estar al corriente del pago o que se ha cancelado la deuda en su totalidad, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.

De acuerdo con el propio Instituto, la implementación de este formato apuesta por elevar los estándares éticos y de responsabilidad pública para el fortalecimiento de una cultura democrática libre de violencia (INE/CG517/2020). El INE especificó que el *Formato* no atenta contra el principio de presunción de inocencia porque se refiere a las resoluciones firmes que hayan dictado las autoridades correspondientes tras el respectivo proceso.

También señaló que es un documento de buena fe, el partido no tiene obligación de realizar una investigación oficiosa: “la revisión más exhaustiva del cumplimiento de dicho requisito solo se tornara oficiosa cuando exista una denuncia o se presenten datos que desvirtúen la manifestación bajo protesta de decir verdad formulada por la persona ciudadana aspirante a una candidatura de cargo de elección popular en el sentido de que no ha sido condenado o sancionado por sentencia firme por incurrir en alguna de las conductas antes señaladas” (INE/CG517/2020).

¿Cómo fue su implementación?

Tras la aprobación del *Formato*, el 15 de diciembre de 2020 se modificó la Convocatoria para aspirantes a una diputación y los lineamientos del apoyo de la ciudadanía para las candidaturas independientes con el fin de incorporar este requisito.

Ocho días después, el 21 de diciembre, el Consejo General del Instituto aprobó los modelos de formatos, mientras que el 3 de abril aprobó su procedimiento de revisión y luego de dos días instaló el grupo interdisciplinario de trabajo para llevarla a cabo (INE/CG514/2021).

Durante dicha sesión, se generaron un diagrama de flujo sobre las actividades de revisión y una guía de actuación para las Juntas Locales Ejecutivas, así como diversos formatos para los requerimientos y garantías de audiencia.

Asimismo, se aprobó la formación de equipos para distribuir las actividades correspondientes a la verificación en las cinco circunscripciones electorales de la siguiente forma:

- 1° circunscripción: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
- 2° circunscripción: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
- 3° circunscripción: Dirección Jurídica.
- 4° circunscripción: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
- 5° circunscripción: Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.

Además, determinó también que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos sería quien recibiera las quejas, denuncias y otros escritos presentados por el posible incumplimiento del *Formato* (INE/CG335/2021).

Para difundir la implementación de esta medida, el INE publicó dos desplegados en medios impresos nacionales y 36 en medios impresos locales, mientras que las Juntas locales y distritales publicaron en los estrados el listado de candidaturas en caso de que la ciudadanía contara con información al respecto de alguna de ellas porque, como ya se señaló, el *Formato* debió incluirlo la persona aspirante a una candidatura a una diputación al momento de registrarse y, para verificar la información, el INE determinó analizar posteriormente una muestra aleatoria representativa de los formatos presentados.

Esta decisión fue impugnada ante el Tribunal Electoral por considerar que ello “contraviene el mandato legal relativo a que ninguna persona que hubiera cometido actos que constituyan violencia de género puede ser registrada como candidata u ocupe un cargo público” (SUP-JDC-552/2021). No obstante, la Sala Superior estimó en el SUP-JDC-552/2021 que, al ser un formato firmado de buena fe, sin naturaleza de requisito de elegibilidad previsto en la ley, es el Instituto quien tiene la facultad para definir la

metodología de revisión de su cumplimiento y, en caso de falsedad de declaraciones, dar vista a las autoridades correspondientes. Por lo que se mantuvo esta dinámica de revisión.

La muestra aprobada correspondió a 1,177 personas, de las cuales 822 fueron hombres y 355 mujeres. El Instituto, durante el mes de abril, requirió información a 160 autoridades para la verificación de los *Formatos*: a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, al Consejo de la Judicatura Federal y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, así como a 156 autoridades en las 32 entidades federativas.

En el siguiente cuadro se muestran las respuestas emitidas por las autoridades:

Cuadro 1. Respuestas a requerimientos al respecto del *Formato 3 de 3 contra la violencia*

Autoridad(es)	Respuesta y precisiones
Fiscalía General de la República	La información relacionada con las actividades del Ministerio Público en la etapa de investigación inicial es reservada y la Fiscalía está impedida legal y materialmente para brindar información.
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal	La información que aporten las instituciones de procuración de justicia y del sistema penitenciario sobre las investigaciones, órdenes de detención y aprehensión, procesos penales, sentencias o ejecución de penas, corresponden a las Bases de Datos Criminalísticas y forman parte del Sistema Nacional de Información, por lo que solo pueden tener acceso las Instituciones de Seguridad Pública y las de Procuración de Justicia contempladas en la ley. No se encontraron antecedentes de las personas de la muestra.
Consejo de la Judicatura Federal	Las conductas señaladas no son competencia directa del Poder Judicial de la Federación y no hay registros relacionados,

Autoridad(es)	Respuesta y precisiones
	tampoco en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales	Ninguna de las personas de la muestra tiene registro de condena o sanción que haya quedado firme por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Locales	<ul style="list-style-type: none"> • 102 señalaron la inexistencia de hallazgos. • 8 reportaron datos en la 1° circunscripción con un total de 108 hallazgos, entre homonimias y supuestos de VPG. • 4 reportaron datos en la 2° circunscripción con un total de 19 hallazgos, entre las que se encuentran carencia de resolución firme y supuestos de VPG. • 7 reportaron datos en la 3° circunscripción con un total de 62 hallazgos, entre homonimias y supuestos de VPG. • 7 reportaron datos en la 4° circunscripción con un total de 17 hallazgos, entre supuestos de VPG y distintos. • 2 reportaron datos en la 5° circunscripción con un total de 100 hallazgos, relacionados con supuestos distintos a la VPG. • 8 alegaron que esa información la tenía otra autoridad. • 6 se declararon incompetentes para atender la solicitud. • 12 no respondieron la solicitud de información.

Elaboración propia

¿Cuáles fueron sus resultados?

El 26 de mayo, el Consejo General aprobó la cancelación de tres candidaturas a diputaciones federales al tener sentencias firmes sobre violencia política en contra de las mujeres por razón de género: a un candidato de la 1° circunscripción por la vía de representación proporcional, a una candidata de mayoría relativa de Sinaloa y otro candidato de Morelos también de mayoría (INE/CG514/2021).

En el caso de los primeros dos, la Sala Superior del TEPJF resolvió que el INE carece de facultades para determinar la pérdida de la presunción de contar con un modo honesto de vivir al corresponder únicamente a una autoridad jurisdiccional en la resolución del respectivo procedimiento sancionador, en el que también señalará los alcances y efectos correspondientes (SUP-RAP-138/2021; SUP-REC-531/2018).

Por su parte, mediante la sentencia SCM-JDC-1599/2021, la Sala Regional Ciudad de México señaló que la autoridad debió analizar las circunstancias específicas, considerar su gravedad y, en su caso, si hubo incumplimiento de la sentencia para tomar una decisión integral que no afectara los derechos políticos del candidato. En consecuencia, mediante el acuerdo INE/CG526/2021, el INE restituyó las candidaturas a las tres personas.

e) Registro de Personas Sancionadas por VPG

Otra de las herramientas que se implementaron en el 2020, en el marco de la reforma en materia de violencia política en contra de las mujeres por razón de género publicada en abril, es la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de VPG.

Este Registro es resultado de la visión garantista del Tribunal Electoral. Tiene sus antecedentes en una resolución del 2 de junio de 2020 de la Sala Regional Xalapa, con la que determinó que una persona ejerció violencia política en razón de género y ordenó al Ople que llevara un registro de personas que tuvieran en su contra sentencias por este tipo de violencia, que inscribiera en tal al ciudadano y que se tomara en consideración para el proceso electoral 2020-2021.

Esta sentencia fue impugnada y, en su estudio del caso, la Sala Superior determinó que la Sala Regional sí acreditó los elementos del test de violencia política en razón de género

porque las conductas del actor obstaculizaban el ejercicio de funciones de una servidora pública y se dirigían a ella por ser mujer, tenían un impacto diferenciado al encontrarse en un grado de vulnerabilidad o desventaja, en consecuencia, le afectaron desproporcionalmente porque incluso carecía de mobiliario y de recursos humanos para el desempeño de sus funciones (SUP-REC-91/2020).

De igual forma, la Sala confirmó la decisión de integrar una lista de personas infractoras por VPG al ser una medida necesaria, razonable, válida, constitucional y con un fin legítimo porque permite identificar si se cumple con el mandato de la ley suprema sobre contar con un modo honesto de vivir para contender a un cargo de elección popular.

Apuntó que ese tipo de listas contribuye al cumplimiento de los deberes de las distintas autoridades de proteger y erradicar la violencia en contra de las mujeres, así como de respetar los derechos humanos: “Ese tipo de medidas se pueden entender como un esfuerzo para afrontar y materializar de manera conjunta e institucional la violencia contra las mujeres en el ámbito político electoral” (SUP-REC-91/2020).

Aunque planteó que debe ser el INE quien lleve a cabo las medidas correspondientes y no una autoridad administrativa electoral local, por lo que le dio vista y señaló algunos elementos que se debían tomar en cuenta para la emisión de lineamientos al respecto:

- Que fueran emitidos previo al inicio del proceso electoral 2020-2021.
- Que determinará la forma en que las autoridades judiciales federales o locales deben informar tanto a las autoridades locales del ámbito territorial donde se ejerció la violencia como al INE respecto de las resoluciones o determinaciones en las que exista cosa juzgada.
- Que estableciera el mecanismo adecuado para que cualquier autoridad electoral local pudiera consultar dicha lista; que generara las herramientas de comunicación necesarias para su constante actualización por las diversas autoridades, y que se asegurara de que, una vez emitidos los lineamientos, los Ople creen y adecuen sus registros de VPG de conformidad con ellos.
- Que estableciera la temporalidad en la que deben permanecer vigentes los registros de personas infractoras (pudiendo considerar para ello la gravedad de la infracción).
- Que en el registro solo se agregara información generada con posterioridad a su creación para no afectar el principio de irretroactividad. Y, sobre ello, el TEPJF

también señaló en la resolución SUP-JDC-552/2021 que quien haya sido sancionado por violencia política contra las mujeres en razón de género previo a la creación del Registro, si bien no será incorporado, sus datos sí deben permanecer en los registros de los Ople cuando así lo haya ordenado la autoridad competente.

- Que el registro fuera público.

Así, el 4 de septiembre el INE aprobó los *Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-REC-91/2020 y acumulado* (INE/CG269/2020).

El Registro fue creado como una lista pública que incluye a cualquier persona sancionada por cometer violencia política en contra de las mujeres por razón de género y su permanencia en la base de datos responde a la gravedad de la falta: 3 años si la falta es leve, 4 años si la falta es ordinaria, 5 años si la falta es especial y 6 años si se trata de una reincidencia (INE/CG269/2020).

Su propósito es inhibir que continúe ejerciéndose esta violencia; facilitar la cooperación interinstitucional y, en todo caso, la intersectorialidad, así como concretar la reforma en la materia de 2020.

Los datos consultables en la página de internet del Registro (<https://portal.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/>) son el nombre de la persona sancionada, su sexo, su calidad (precandidatura, aspirante a candidatura o cargo), el ámbito territorial, el número de expediente y fecha de resolución o sentencia, la autoridad que le sanciona, la conducta sancionada, la sanción, la permanencia en el registro y si hay reincidencia.

Al respecto del Registro, la Sala también ha señalado que: “El hecho de que una persona esté en el registro de personas sancionadas por violencia política en razón de género no implica necesariamente que esté desvirtuado su modo honesto de vivir, pues ello depende de las sentencias o resoluciones firmes emitidas por la autoridad electoral competente” (SUP-JDC-552/2021).

III. Conclusiones

Si bien la representación de las mujeres en el ámbito político ha incrementado en los últimos treinta años, su participación en condiciones de igualdad tiene aún un largo camino por delante. Ni hablar del desafío a los roles y estereotipos de género ante una oleada de violencia que ha incrementado durante la contingencia sanitaria en México.

También se ha planteado que se requiere ser conscientes de que la igualdad legal no es lo mismo que la igualdad sustantiva, y que la incidencia de las mujeres ha aumentado, pero que también les ha supuesto enfrentarse a violencia por intentar darle la vuelta a su “lugar asignado” socialmente.

Los avances normativos sobre la paridad y la violencia de género dan muestra de las intenciones de algunos sectores de la sociedad civil y actores políticos para proteger y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. No obstante, es importante no caer en un enfoque “aséptico de género”, en palabras de Lagarde, lo que significa suponer la adopción de una agenda de género, pero sin sustento y que, en consecuencia, está destinada al fracaso por plantear soluciones de corto plazo sin atacar los problemas estructurales.

Reformar las normas para adicionar tipos penales e incrementar las sanciones sin una estrategia social y pública integral puede ser poco fructífero, considerando la falta de garantías sobre la aplicación de la ley ya existente y sobre la actuación impoluta de las autoridades, la falta de recursos públicos que permitan atender problemas urgentes en materia de violencia en contra de las mujeres, la apatía de las autoridades y el desprecio hacia las mujeres y cuerpos feminizados que han vivido violencia de género.

Impulsar medidas como el *Formato 3 de 3 contra la violencia* y el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de VPG parece ser una opción viable, pero también requiere del compromiso y colaboración de las diversas autoridades involucradas. Solo con un enfoque intersectorial y transversal de la perspectiva de género, e idealmente de la perspectiva feminista en los asuntos públicos, hay mayores probabilidades de revertir las desigualdades históricas entre mujeres y hombres.

Al cuestionarse sobre la compatibilidad de que un juez tenga determinada ideología y deba conducirse de forma imparcial y ética, Malem (2017) precisa que al formar parte de una sociedad determinada no es posible encontrar un sujeto ajeno a las ideologías que pudiera

desempeñarse de forma neutral o indiferente. No obstante, señala que su labor implica el respeto a los principios éticos judiciales: la independencia individual e institucional, la imparcialidad, la legalidad, la integridad y la motivación, y que debe observar también otras virtudes como la prudencia, el buen juicio y la perspicacia.

En el caso de quien busca representar los intereses de grupos o personas en una democracia, ¿no resulta lógico y fundamental que se les requiera el respeto a los valores democráticos: igualdad, libertad y pluralidad?, ¿qué se les exija respeto a las normas que la sociedad ha establecido para la sana convivencia y a los derechos humanos? y ¿qué tenga un comportamiento ético?

Fuentes consultadas

Beauvoir, Simone. 1977. *El segundo sexo*. Buenos Aires: Siglo Veinte.

Cámara de Diputados. [2020](#). “Diputadas y Diputados integrantes de la LXIV Legislatura”. México.

Cobo, Rosa. 2011. *Hacia una nueva política sexual. Las mujeres ante la reacción patriarcal*. Madrid: Anagrama.

CoIDH. Corte Interamericana de Derechos Humanos. [2009](#). “Caso González y otras vs. México”.

CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2021. México: Cámara de Diputados.

Cuervo Montoya, Edison. 2016. “Exploración del concepto de violencia y sus implicaciones en educación”. En *Política y cultura*. Septiembre-Diciembre. México.

DOF. Diario Oficial de la Federación. [2019](#). DECRETO por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros. 6 de junio.

García, Ana Karen. [2021](#). “#8M2021: ni la pandemia detuvo la violencia de género: 10 mujeres son asesinadas cada día en México”. En *el Economista*. México.

- Gilas, Karolina M. y Méndez Pacheco, Alma Verónica. 2018. “Entre cuotas y violencia de género: avances y retrocesos en la participación política de las mujeres en México”. En *Hallazgos*. Vol. 15, núm. 29. Enero-Junio. Bogotá.
- Hobbes, Thomas. 1980. *Leviatán*. Madrid: Editora Nacional.
- INE. Instituto Nacional Electoral. sf. *Cómo denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género en el INE. 11 pasos*. México.
- INE. Instituto Nacional Electoral. 2021a. *Numeralia de Procesos Electorales 2020-2021*. México.
- INE. Instituto Nacional Electoral. 2021b. *Plan integral y calendario del Proceso Electoral Federal*. México.
- INE. Instituto Nacional Electoral. 2021. *Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género* [Sitio web]. Disponible en <https://portal.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/>
- INE/CG517/2020. 2020. Acuerdo del consejo general del instituto nacional electoral por el que se aprueban los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. México.
- Lagarde, Marcela. 2008. “Antropología, feminismo y política: violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres”. En *Retos teóricos y nuevas prácticas* (Coords. Bullen, Margaret y Diez Mintegui, Carmen). San Sebastián: Ankulegi.
- Lerner, Gelda. 1985. *La creación del patriarcado*. Barcelona: Crítica.
- LGAMVLV. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 2020. México: Congreso de la Unión.
- LGIPE. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 2020. México: Congreso de la Unión.
- LGPP. Ley General de Partidos Políticos. 2020. México: Congreso de la Unión.
- Mackinnon, Catherine A. 1983. *Feminismo inmodificado: discursos sobre la vida y el derecho*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Malem Seña, Jorge F. 2017. *Los jueces: ideología, política y vida privada*. México: Tirant Lo Blanch, CJF.

ONU. Organización de las Naciones Unidas. 2014. *Los derechos de la mujer son derechos humanos*. Naciones Unidas.

Scott, Joan Wallach. 2000. *Género e historia*. Ciudad de México: FCE-UACM.

Segato, Rita Laura. 2016. *La guerra contra las mujeres*. Madrid: Traficantes de sueños.

Senado de la República. [2020](#). “Senadoras”. México.

[SCM-JDC-1599/2021](#). Parte Actora: Raúl Tadeo Nava. Autoridad Responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

[SUP-JDC-552/2021](#). Actoras: Guadalupe Alamaguer Pardo y Esmeralda Arizmendi Bahena. Órgano Responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

[SUP-RAP-138/2021](#) y acumulados. Actores: Ana Elizabeth Ayala Leyva y Manuel Guillermo Chapman Moreno. Responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

[SUP-REC-91/2020](#) y acumulado. Actor: Dante Montaña Montero. Responsable: Sala Regional Xalapa.

TEPJF. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. [2021](#). “Calendario electoral”. México.

Toche, Nelly. [2021](#). “El proceso electoral de 2021, el más violento hacia las mujeres, 21 candidatas asesinadas”. En *El Economista*. México.

Tubert, Silvia. “La crisis del concepto género”. En *Feminismos*. Madrid: Cátedra.